



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA

Que en la Sesión nº 35/05 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 6 de octubre de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual, en relación con el expediente RO 2004/1868, se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR RO2004/1868 INCOADO A LA MERCANTIL EUROTELE TOR, S.L. POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2004.

Finalizada la instrucción del presente expediente sancionador incoado a EUROTELE TOR, S.L. por Acuerdo del Consejo de esta Comisión de 25 de noviembre de 2004 y, vista la propuesta de resolución elevada a este Consejo por el instructor del citado procedimiento sancionador, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. del día de la fecha, la siguiente Resolución:

I

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. . Con fecha 15 de marzo de 2004, tuvo entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones un escrito de Don Ángel Osuna Molina, en nombre y representación de Ángel Seguridad y Telecomunicaciones, S.L., mediante el cual se puso en conocimiento de esta Comisión que la entidad mercantil EUROTELE TOR, S.L. (en adelante, EUROTELE TOR) venía comercializando *“el servicio a terceros de red soporte de la señal de radio y televisión sin estar habilitado para ello ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”*. (Doc. nº 1 del expediente)

En dicho escrito, el representante legal de Ángel Seguridad y Telecomunicaciones, S.L. solicitó a esta Comisión que inspeccionase la actividad de la entidad denunciada, que adoptase las sanciones que



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

correspondieran y que pusiese en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia las conductas denunciadas.

SEGUNDO. Una vez analizado el contenido del anterior escrito y examinados los antecedentes obrantes en esta Comisión respecto de lo hechos denunciados, se acordó la apertura de un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso y decidir sobre la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC).

Asimismo, se consideró preciso llevar a cabo una actuación de inspección de la actividad de EUROTELE TOR. En consecuencia, al amparo de lo establecido en el artículo 48.3 letra i de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2004 (Doc.nº 2) se requirió la actuación de los servicios de la Inspección de Telecomunicaciones adscritos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, al objeto se solicitase, por el órgano administrativo competente, la realización de las siguientes actividades de inspección:

1. Inspección técnica de la red pública de comunicaciones electrónicas supuestamente explotada por la entidad EUROTELE TORREVIEJA, S.L. mediante la utilización del dominio público radioeléctrico, con el fin de efectuar la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas que pudieran constituir infracciones tanto de las condiciones establecidas en la normativa que resulte de aplicación para la utilización del dominio público radioeléctrico, como del artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. Inspección de las instalaciones de la red pública de comunicaciones electrónicas supuestamente explotada por la entidad EUROTELE TORREVIEJA, S.L. mediante la utilización del dominio público radioeléctrico, con el fin de determinar con la mayor precisión posible la fecha de inicio de la supuesta explotación, en su caso, de la citada red pública de comunicaciones electrónicas mediante la utilización del dominio público radioeléctrico.

La apertura del período de información previa fue notificada a la entidad denunciante, mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2004. (Doc. nº 4).

TERCERO. En fecha 27 de mayo de 2004, se recibió en el Registro de esta Comisión escrito del representante legal de Ángel Seguridad y Telecomunicaciones, S.L., mediante el cual se vino a aportar información



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

complementaria sobre la actividad de EUROTELE TOR, en concreto determinados datos inscritos en el Registro Mercantil. (Doc. nº 3).

CUARTO. Mediante escrito de fecha 14 de julio de 2004, con entrada en el Registro de esta Comisión el día 19 de julio del mismo año, el Subdirector General de Inspección y Supervisión de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información remitió un informe respecto de lo interesado por esta Comisión en su escrito de fecha 27 de mayo de 2004. (Doc.nº 5).

En concreto, en el citado escrito consta que:

“Por parte de los servicios de inspección de la Jefatura Provincial de Alicante se realizaron las comprobaciones técnicas pertinentes y se constató la existencia de varias empresas, entre las cuales se encuentran las que Vd. cita, EUROTELE TORREVIEJA, S.L. [...], que se dedican a actividades de radiodifusión que pueden constituir infracción administrativa.”

Asimismo, se acompañan, entre otras, dos copias compulsadas de las actas de inspección levantadas por inspectores de la Jefatura Provincial de Inspección de Alicante, en fechas respectivas 21 y 28 de enero de 2004, en las que constan los siguientes datos:

- En el Acta correspondiente a la fecha 21 de enero de 2004, consta la existencia de una estación base radioeléctrica marca ALLSAT en banda 13,825 a 14,625 Ghz, ubicada en Plaza Cartero Rural, S/N, figurando en las observaciones la siguiente expresión: “EMITE TREINTA Y DOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN”. En el Acta de inspección de referencia, el representante legal de EUROTELE TOR hace constar expresamente que *“el sistema se utiliza como punto a punto con Torrevieja”*. La citada Acta está firmada por los inspectores actuantes y por el gerente de EUROTELE TOR, Reiner Josef Kaindl, según consta en la copia remitida con el informe de referencia.
- En el Acta correspondiente a la fecha 28 de enero de 2004, consta la existencia de una estación base radioeléctrica marca KATHREIN en banda 2,5 a 2,7 Ghz, ubicada en la calle San Pascual nº 239 de Torrevieja (Alicante), figurando en las observaciones la siguiente expresión: “EMITE 24 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN SISTEMA MMDS”. La citada Acta está firmada por los inspectores actuantes y por el gerente de EUROTELE TOR, Reiner Josef Kaindl, según consta en la copia remitida con el informe de referencia.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

QUINTO. Considerando que en el marco de las actuaciones previas seguidas en esta Comisión se puso de manifiesto la existencia de diversas entidades mercantiles con denominaciones semejantes, tales como Eurotele Torrevieja, Eurotele Tor y Eurotele Sistemas Digitales, todas ellas bajo la forma de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, y que en concreto Eurotele Sistemas Digitales, S.L. quedó inscrita en el Registro Especial de Titulares de Autorizaciones Generales mediante Resolución de esta Comisión de fecha 16 de junio de 2004 como persona autorizada para la explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fue preciso llevar a cabo una consulta telemática en el Registro Mercantil Central, de cuyo contenido resultó que actualmente existen inscritas dos sociedades con mismo domicilio y administrador único: por un lado, Eurotele Sistemas Digitales, S.L., con CIF B53866174 y, por otro lado, Eurotele Tor, S.L., con CIF B53286738.

De las actuaciones previas practicadas y del contenido de las respectivas Actas de inspección se concluyó que la entidad inspeccionada fue concretamente EUROTELE TOR, con CIF B53286738, entidad que no ha notificado hasta la fecha su interés en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas, no figurando inscrita en el Registro Especial de Titulares de Autorizaciones Generales.

SEXTO. Del resultado de las actuaciones llevadas a cabo en el período de información previa se llegó a la conclusión que había elementos de juicio suficientes para estimar que concurrían las circunstancias que justificaban la iniciación de un procedimiento sancionador contra EUROTELE TOR, por haber, presuntamente, iniciado la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, exigibles para realizar tales actividades.

SÉPTIMO. Una vez determinada con carácter preliminar la concurrencia de circunstancias que justificaban el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, se redactó la propuesta de acuerdo de apertura (Documento 6).

Trasladada dicha propuesta al órgano competente para acordar el citado inicio del procedimiento, en fecha 25 de noviembre de 2004, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó una Resolución (Documento 7) por la que se acordó la apertura de un procedimiento sancionador contra la mercantil EUROTELE TOR, S.L., como presunto responsable directo de una infracción administrativa calificada como muy grave, tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, consistente en la presunta explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir con los requisitos exigibles para realizar tales



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividades, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

El acuerdo de iniciación fue notificado a la citada mercantil el día 9 de diciembre de 2004, según consta debidamente acreditado en el expediente (Documento 8). Igualmente, el citado acuerdo de iniciación fue notificado al denunciante ANGEL SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L., (Documento 9) así como al instructor (Documento 10) con traslado, a éste último, de las actuaciones existentes hasta la fecha; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, (en adelante, Reglamento del Procedimiento Sancionador).

OCTAVO. Con fecha 3 de enero de 2005, se puso de manifiesto el expediente al representante de EUROTELE TOR, en cuyo acto consultó y recibió las copias de los documentos que consideró oportunos. (Documento 11).

NOVENO. Ampliado el plazo para efectuar alegaciones, a petición de la representación legal de EUROTELE TOR, (Documentos 12 y 13 del expediente), en fecha 1 de febrero de 2005, se recibió en el Registro de esta Comisión escrito de alegaciones de la citada mercantil de fecha 25 de enero del mismo año (Documento 14), respecto del acuerdo de inicio previamente notificado.

En el citado escrito, EUROTELE TOR vino a alegar lo siguiente:

- Que la citada empresa realizó determinadas pruebas para la transmisión de información, texto, imagen y sonido utilizando el dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común y en régimen de auto prestación, pero que finalmente no realizó actividad de explotación de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones ni retransmisión de programa de televisión alguno.
- Que no realizando pues, actividad de comunicaciones electrónicas no procede que recaiga sobre ella responsabilidad administrativa alguna por los hechos imputados en el presente expediente sancionador.
- Que por idénticos hechos constatados en el Acta de Inspección de 28 de enero de 2004, levantada por la Jefatura Provincial de Inspección de Alicante, se dictó el 27 de septiembre del mismo año, por la SETSI, Orden de incoación de expediente sancionador nº IS/S 01338/04, previo al presente expediente sancionador, por lo que, en aplicación del principio “non bis in idem” debe procederse al archivo de las presentes actuaciones,



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

o al menos a su suspensión entretanto recaiga resolución firme en el expediente ministerial previo.

Asimismo, en el escrito de alegaciones de referencia, EUROTELE TOR solicitó la apertura de un periodo de prueba solicitando la práctica de los siguientes medios de prueba:

“1º.- Se dirija oficio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a fin de que se expida copia cotejada e íntegra del expediente sancionador incoado contra EUROTELE TOR, SL, IS/S 01338/04, para su remisión a este Órgano e incorporación como prueba documental al presente expediente.

2º.- Se incorpore igualmente al expediente el acuerdo del Consejo de esta Comisión de iniciación de expediente sancionador contra el denunciante, caso de existir; Y de no haberse adoptado, se informe por esta misma Comisión la distinta situación del denunciante en relación con los expedientes sancionadores incoados con motivo de su denuncia y que implican esa no adopción. La petición de esta prueba tiene por base, además de por constar en el expediente similar Acta de Inspección al denunciante, conocer los criterios de actuación de esa Comisión ante idénticos hechos pero no denunciados previamente por ningún otro particular”.

DECIMO. En atención a la solicitud de la entidad denunciada interesando la apertura de un periodo de prueba, el instructor del procedimiento acordó la apertura de un periodo de prueba en fecha 11 de febrero de 2005 (Documento 17), conforme lo dispuesto en los artículos 80 y 137.4 de la LRJPAC y del artículo 17 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, (en adelante, Reglamento del Procedimiento Sancionador). El acuerdo de apertura estableció un plazo común para la práctica de todas las pruebas previstas de treinta días.

En el acuerdo de apertura se estimó pertinente la práctica de los siguientes medios de prueba:

1.- PRUEBA DOCUMENTAL.

- a) Consistente en que se incluyan en el ramo de pruebas propuestas por el interesado copia de todos y cada uno de los documentos obrantes en el expediente sancionador incoado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información contra EUROTELE TOR S.L. con el nº IS/S 01338/04, a cuyo efecto se acuerda dirigir oficio a la citada Secretaría al objeto remita copia cotejada e íntegra del citado expediente sancionador.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- b) Consistente en que se incluyan en el ramo de pruebas practicadas de oficio por el instructor del procedimiento copia de todos y cada uno de los documentos obrantes en el presente expediente sancionador RO 2004/1868. En especial, sin perjuicio de cualquier otro, se señalan las Actas de Inspección - incluidas en el Documento n 5 del Expediente- levantadas por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Alicante, con entrada en el Registro de esta Comisión el día 19 de julio de 2004.

Por el contrario, en el citado escrito de apertura, se estimó impertinente la práctica de la segunda de las pruebas propuestas por la representación legal de EUROTELE TOR, por los siguientes motivos:

“2.- INADMISIÓN DE PRUEBA

En relación a la prueba propuesta en el ordinal nº 2 del escrito formulado por la representación legal de EUROTELE TOR S.L., consistente en que *“se incorpore al expediente el acuerdo del Consejo de esta Comisión de iniciación de expediente sancionador contra el denunciante, (esto es, contra ANGEL SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.L.), caso de existir... con el fin de conocer los criterios de actuación de esta Comisión ante casi idénticos hechos pero no denunciados previamente por ningún otro particular”*, se declara su inadmisión por falta de objeto material al no existir expediente alguno incoado por esta Comisión contra ANGEL SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.L. por los hechos a los que se refiere la citada representación legal.

En cualquier caso, la hipotética incoación por esta Comisión de un expediente sancionador contra la citada mercantil, no alteraría en absoluto el resultado final del presente procedimiento sancionador, lo que se significa a efectos de lo dispuesto en el artículo 17. 2 del Reglamento del Procedimiento sancionador.

Por último y en cuanto al criterio para no abrir sancionador al denunciante (Angel Seguridad y Telecomunicaciones S.L.) en cuanto sujeto de una inspección similar a la practicada a EUROTELE TOR, S.L., se contestará como alegación en la correspondiente Propuesta de Resolución, siendo improcedente en el actual periodo probatorio.”

El citado acuerdo de apertura de un periodo de prueba fue notificado al interesado en fecha 15 de febrero de 2005, según consta debidamente acreditado en el procedimiento.

UNDÉCIMO. Al amparo del artículo 16.2 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, se han llevado a cabo los demás actos de instrucción necesarios para el examen de los hechos.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DUODÉCIMO. Con fecha 15 de julio de 2005, el instructor del procedimiento sancionador emitió la correspondiente propuesta de resolución (Documento 22) en la que se proponía lo siguiente:

“ (...)

PRIMERO. *Que se declare responsable directo a EUROTELE TOR, S.L. de la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber iniciado, sin presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones vigente, las actividades consistentes en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.*

SEGUNDO. *Que se imponga a EUROTELE TOR S.L. una sanción económica por importe de DOCE MIL (12.000) EUROS.”*

Dicha propuesta de resolución fue notificada a la mercantil EUROTELE TOR mediante escrito del instructor de fecha 19 de julio de 2005, siendo recibida por la representación legal de dicha entidad el día 25 de julio de 2005. (Documento nº 23)

DECIMOTERCERO. La representación legal de EUROTELE TOR no ha presentado alegaciones a la propuesta de resolución notificada.

DECIMOCUARTO. Con fecha 26 de septiembre de 2005, el instructor del presente procedimiento sancionador dio traslado al Secretario de esta Comisión de la propuesta de resolución, junto con el expediente administrativo instruido (Documento nº 24).

II

HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el expediente y de la prueba practicada, esta Comisión estima que han resultado probados, a los efectos del procedimiento de referencia, los siguientes hechos:

ÚNICO. **Que la mercantil EUROTELE TOR, S.L., explotaba, en fecha 28 de enero de 2004, una red pública de comunicaciones electrónicas, mediante la utilización del dominio público radioeléctrico, emitiendo 24 programas de televisión en sistema MMDS, sin efectuar la notificación fehaciente a la**



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

que se refiere el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Según consta en las actuaciones realizadas y en los documentos incorporados a la instrucción del procedimiento sancionador, este hecho probado resulta de lo siguiente:

Prueba documental incorporada al procedimiento sancionador

El primer documento relevante incorporado a la prueba documental del procedimiento sancionador, a solicitud del instructor del expediente, lo constituye la denuncia de Angel Seguridad y Telecomunicaciones, S.L.,(Doc. 1) y su posterior escrito de ampliación (Doc. 3), de los que se desprenden ya indicios, según los cuales, la mercantil EUROTELE TOR, había llevado a cabo la creación de una red fija de comunicaciones electrónicas, basada en la utilización del dominio público radioeléctrico, cuya finalidad sería la de ofrecer a terceras personas un servicio de difusión de señales de televisión y radio, y ello sin estar habilitado al no haber procedido a notificar fehacientemente dicha actividad ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Así, en uno de los escritos presentados por el denunciante, se señala la localización exacta de los centros principales de emisión de las señales de radio y televisión emitidas por la empresa denunciada para la zona de cobertura de Torrevieja, sitios en:

*“C)San Pascual nº 239, Torrevieja (Alicante). Azotea Edificio Charly.**

C)Guadalajara,Edificio Torrenueva 1. Azotea Reina.La Mata (Torrevieja)*

** Centros de emisión ubicados en zona común de comunidades de propietarios de las referidas fincas, vanos de emisión para servicio de transmisión punto multipunto”.*

Los anteriores indicios fueron confirmados mediante el Acta de Inspección, levantada por Inspectores de la Jefatura Provincial de Inspección de Alicante, en fecha 28 de enero de 2004, (Doc. nº 5), en la que consta la existencia de una estación base radioeléctrica cuyo titular es EUROTELE TOR, ubicada en la C/ San Pascual nº 239 en Torrevieja, cuyos elementos radiantes eran de la marca y tipo: KATHREIN MODELO MMH-4C, y en cuyo apartado de observaciones figura la siguiente expresión: EMITE 24 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN SISTEMA MMDS.

Igualmente, en el escrito de alegaciones de la representación legal de EUROTELE TOR de fecha 1 de febrero de 2005 (Doc nº 14), la citada representación alega lo siguiente: “a principios del pasado año, la Empresa que



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

represento realizó determinadas pruebas para la transmisión de información, texto, imagen y sonido utilizando el dominio público radioeléctrico..”.

Por último, de la diligencia practicada por el Instructor del Expediente en fecha 30 de mayo de 2005, consistente en consultar el Registro Público de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas (Doc. nº 21), ha quedado acreditado que, a dicha fecha, la mercantil EUROTELE TOR, S.L. no había notificado a esta Comisión su intención de explotar una red pública de comunicaciones electrónicas o prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, sin que figure, pues, dicha mercantil inscrita en el citado Registro de Operadores.

Por todo ello, se considera plenamente probado que la mercantil EUROTELE TOR, S.L. ha realizado, sin presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la actividad consistente en la explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas, mediante la instalación y/o explotación de una estación radioeléctrica sita en la C/ San Pascual nº 239 en Torrevieja (Alicante), a través de la cual se emiten 24 programas de televisión en sistema MMDS.

III

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Habilitación competencial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para resolver el presente procedimiento sancionador.

El Pleno del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es el órgano competente para incoar y resolver el presente procedimiento sancionador, a tenor de lo establecido en el artículo 58 a) 1º de la Ley 32/2003. De acuerdo con este precepto, corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por medio de su Consejo, el ejercicio de la competencia sancionadora cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los párrafos q) a x) del artículo 53, infracciones graves tipificadas en el párrafo p) y, en el ámbito material de su actuación, en el párrafo q) del artículo 54.

SEGUNDO. Tipificación de los hechos probados.

El presente procedimiento sancionador se inició ante la posible comisión de una infracción tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, que califica como infracción muy grave la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

tales actividades establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

Tal y como consta en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador (Documento 7), el expediente se inició contra EUROTELE TOR, S.L., por haber incurrido presuntamente en la conducta consistente en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades, establecidos en la Ley 32/2003 y su normativa de desarrollo.

El apartado 2 del artículo 6 de la Ley 32/2003 establece como un requisito exigible para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, que los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos que se determinen mediante real decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que se pretenda realizar.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta el alcance legal de los conceptos: “*Explotación de una red de comunicaciones electrónicas*” y “*Servicio de comunicaciones electrónicas*”.

La Ley 32/2003 define estos conceptos en su Anexo II, de la siguiente forma:

“13. Explotación de una red de comunicación electrónica: la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red.”

“28. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas ...”

También ha de tenerse en consideración que, a diferencia de lo que establecía el artículo 7.1 de la anterior Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (derogada por la vigente Ley 32/2003), la actual Ley General de Telecomunicaciones no prevé supuestos en los que se puedan otorgar autorizaciones provisionales para la realización de pruebas de carácter experimental y para actividades de investigación. El régimen legal actualmente en vigor que regula la autorización general está diseñado de tal forma que, cualquier actividad que pueda ser encuadrada dentro de las definiciones anteriormente transcritas, deberá ser objeto previo de la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003. Esto es así por cuanto la autorización



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

general que habilita para realizar estas actividades dimana directamente de la propia Ley, por lo que los interesados que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 6.1 de la Ley para quedar amparados por la citada autorización general, solo han de cumplir, de forma previa al inicio de la actividad, con la obligación de realizar la citada notificación.

A la luz de las anteriores consideraciones, es preciso analizar el alcance de la afirmación de EUROTELE TOR destacando que, conforme a lo establecido en el Anexo II de la Ley 32/2003, la explotación de una red incluye su creación como requisito suficiente, según la definición citada, y que la Ley 32/2003 no contempla la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en pruebas a través de la correspondiente autorización provisional (artículo 7.1 de la derogada Ley 11/1998, de 24 de abril).

De este modo, la representación legal de EUROTELE TOR, mantiene en su escrito de alegaciones, que *“a principios del pasado año (ni siquiera se concreta la fecha), la Empresa que represento realizó determinadas pruebas para la transmisión de información, texto, imagen y sonido utilizando el dominio público radioeléctrico..”*. Tal afirmación viene a significar la aceptación por EUROTELE TOR, del hecho de que la red, o parte de ella, ya estaba creada a esa fecha, y se estaban ofreciendo, a través de ella, información, texto, imagen y sonido, al menos en pruebas.

Por todo ello, se concluye que la instrucción del procedimiento sancionador ha revelado que la infracción tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003 se concreta, en el presente caso, en que EUROTELE TOR explotaba, con fecha 28 de enero de 2004, una red de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades, esto es, sin haber presentado ante esta Comisión, la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, existiendo pues la tipicidad en la actuación de la citada mercantil, conforme lo establecido en el artículo 129 de la LRJPAC.

TERCERO. Culpabilidad de EUROTELE TOR, S.L. en la comisión de la infracción y ausencia de eximentes de responsabilidad.

A. Culpabilidad de EUROTELE TOR, S.L., en la comisión de la infracción.

Una vez acreditada la existencia de una infracción creada y tipificada por la Ley, el ejercicio efectivo de la potestad sancionadora precisa de un sujeto pasivo al que se impute su comisión. La realización de un hecho antijurídico debidamente tipificado ha de ser atribuida a un sujeto culpable.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1995 (RJ 1995\9329), reconoce la aplicabilidad del principio de culpabilidad al ámbito del procedimiento administrativo sancionador:

“La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la Administración, en tanto que manifestación del “ius puniendi” del Estado, se rige por los principios del Derecho penal, siendo principio estructural básico el de culpabilidad, incompatible con un régimen de culpabilidad objetiva, sin culpa, encontrándose esta exigencia expresamente determinada en el artículo 130.1 LRJPAC ...”.

De conformidad con esta doctrina jurisprudencial, el legislador español ha recogido el principio de culpabilidad al regular la potestad sancionadora de la Administración. Así, el art. 130.1 de la LRJPAC establece que:

“Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”

De este modo, para la imposición de una sanción por la Administración se exige que el infractor sea culpable de los actos sancionados; es decir, que le sea imputable la autoría de la infracción, aún a título de simple inobservancia, tal y como establece el artículo 130.1 de la LRJPAC. En este sentido se expresa el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 28 de noviembre de 1994 (RJCA 1995\678):

“Asimismo se alega la inexistencia de culpabilidad a título de dolo o culpa. Pero es evidente que el incumplimiento por la Empresa de medidas de obligada observancia constituye al menos una negligencia y, como tal, debe ser calificada de conducta culposa.”

En todo caso, el elemento subjetivo que la culpabilidad supone se refiere a la acción en que la infracción consiste y no a la vulneración de la norma, tal y como ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1991 (RJ 1991\477), en su Fundamento de Derecho Cuarto, enuncia claramente la conceptualización del principio de culpabilidad:

“Por último en cuanto a la alegada ausencia de intencionalidad de incumplir las disposiciones legales, referidas en la resolución sancionadora, y a la necesidad del dolo o culpa como elemento de la infracción administrativa, debe señalarse, que, sin negar este elemento, no puede afirmarse que el dolo o la culpa deban entenderse como acto de voluntad directamente referido a la vulneración de la norma que define el tipo de falta, sino que con lo que debe relacionarse dicha



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

voluntad, como elemento del dolo o culpa, es con la conducta y el resultado de ella que dicha norma contempla como supuesto del tipo de falta.

No es que se quiera vulnerar la norma, sino que se quiera realizar el acto que la norma prohíbe.”

Tal y como queda expresado en la Jurisprudencia invocada, un elemento necesario de la infracción administrativa es el dolo o la culpa. En lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto por el artículo 130.1 de la LRJPAC y el artículo 1.104 del Código Civil lleva a concluir que, en el cumplimiento de las obligaciones, ha de ponerse aquella diligencia que resulte exigible en función de la propia naturaleza de la obligación y de las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. En consecuencia, cabe atribuir responsabilidad a título de negligencia, entendida como la falta de diligencia debida para evitar un resultado antijurídico, previsible y evitable.

En este sentido, ha de señalarse que, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (entre otras, así lo exponen la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo del artículo 61 de la LOPJ de 6 de noviembre de 1990 [RJ 1992\9158], y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1994 [RJ 1994\5590]).

Asimismo, en el presente caso, el análisis de la concurrencia de culpa o negligencia debe atender al sector social sobre el que se proyectan las acciones y omisiones que constan probadas, es decir, al mercado de las telecomunicaciones. Así lo tiene establecido un consolidado criterio jurisprudencial plasmado, entre otras muchas, en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1985 (RJ 1985\199):

“ (...) como ya viene sancionando con reiteración la jurisprudencia de esta Sala en sus sentencias, entre otras, de quince de junio de mil novecientos sesenta y siete (RJ 1967\3487) y cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y dos (RJ 1982\1286) y como dice esta última «para calificar como culposa una conducta no sólo ha de atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias de personas, tiempo y lugar, sino además al sector del tráfico o de la vida social, en que la conducta se proyecte, y determinar si el agente obró con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes ajenos jurídicamente protegidos, contemplando no sólo el aspecto individual de la conducta humana, sino también su sentido social, determinado por la función de esta conducta, en la vida en común»”.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Partiendo de todo ello, es preciso concluir en la existencia de una conducta culpable por parte de EUROTELE TOR en los hechos que configuran el tipo infractor del que trae causa el presente procedimiento sancionador.

En efecto, a la luz de los actos de instrucción y de los hechos probados que constan en la presente Resolución, así como de los razonamientos que más adelante se exponen en contestación a las alegaciones del imputado, resulta que la citada entidad ha realizado la conducta objeto de la infracción de forma consciente y voluntaria. Por otra parte, teniendo en cuenta la actitud que ha dado lugar a la comisión de la infracción (haber omitido el deber de realizar la notificación previa a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32/2003), ésta debe ser considerada como una actitud negligente o viciada de ignorancia inexcusable, con la consiguiente culpabilidad.

B. Inexistencia de causas eximentes de responsabilidad.

En cuanto a la concurrencia en el presente caso de causas eximentes de la responsabilidad, es preciso traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de octubre de 1998 (RJCA 1998\3874), que concluye que, atribuida una conducta infractora a un sujeto, concurre la culpabilidad salvo aparición de circunstancias eximentes:

“... El elemento de la culpabilidad... presupone que la acción u omisión enjuiciada ha de ser imputable a su autor por malicia, o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 febrero 1990). Ahora bien presupuesto el fundamento de la culpabilidad es la imputabilidad que ha sido definida por Luzón Domingo como la “posibilidad abstracta y potencial de que al hombre le sean atribuibles conductas que puede realizar, como a su causa eficiente, consciente y libre”. Pero este supuesto de la culpabilidad no se formula de forma positiva sino que ha de deducirse de la no concurrencia de alguna de las causas que lo excluyen.”

Tales circunstancias eximentes, reguladas en el actual Código Penal (cuyos principios son de aplicación, tal y como ha señalado reiteradamente la Jurisprudencia, al procedimiento administrativo sancionador), no concurren en el supuesto que nos ocupa, pues o bien se refieren a circunstancias subjetivas que sólo pueden concurrir en las personas físicas y no en las jurídicas, o bien se refieren a la intervención de un tercero o a la existencia de un acontecimiento de fuerza mayor, lo que no resulta de los hechos probados.

En consecuencia, no cabe aplicar al presente supuesto ninguna causa eximente de responsabilidad.

CUARTO. Circunstancias modificativas de la responsabilidad infractora.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

a) Circunstancias agravantes.

De acuerdo con los criterios de graduación contenidos tanto en el artículo 56.2 de la Ley 32/2003 como en el artículo 131.3 de la LRJPAC, se considera que no concurre en el presente caso ninguna causa de agravación de la responsabilidad.

b) Circunstancias atenuantes.

De acuerdo con los criterios de graduación contenidos tanto en el artículo 56.2 de la Ley 32/2003 como en el artículo 131.3 de la LRJPAC, se considera que concurren en el presente caso las siguientes circunstancias atenuantes de la responsabilidad:

- Inexistencia de infracciones cometidas por el sujeto infractor con anterioridad.
- La ausencia de beneficio para el infractor por los hechos objeto de infracción.

QUINTO. Contestación a las alegaciones formuladas por la representación legal de EUROTELE TOR, S.L. incluidas en su escrito de fecha 1 de febrero de 2005 (Documento 14).

Tal y como consta en los antecedentes de hecho de la presente resolución, mediante escrito de fecha 25 de enero de 2005, con entrada en el Registro de esta Comisión el día 1 de febrero del mismo año, la representación legal de EUROTELE TOR, presentó las alegaciones que tuvo por conveniente (Documento 14), procediéndose a continuación a darles cumplida contestación:

- Falta de comisión de la infracción por encontrarse la red explotada en pruebas.

El representante legal de EUROTELE TOR alega no haberse cometido la infracción imputada por cuanto nunca se procedió a la explotación de una red y a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, puesto que la citada mercantil únicamente realizó determinadas pruebas para la transmisión de información, texto, imagen y sonido en régimen de autoprestación.

Al respecto cumple señalar, en primer lugar, que el concepto de explotación de una red de comunicaciones electrónicas incluye la creación de dicha red, tal y como se desprende del citado Anexo II de la Ley 32/2003. Por ello, la infracción se habría perfeccionado desde el momento en que EUROTELE TOR había creado una red de comunicaciones electrónicas, sin notificación fehaciente



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

previa a esta Comisión, con total independencia de las pruebas que se estimase oportuno efectuar sobre ella.

En segundo lugar, y con abstracción del hecho de que la red ya estuviese creada -incurriendo por dicha creación y por sí sola, como queda dicho, en el tipo infractor del artículo 53 t) de la Ley 32/2003- resulta que esta Ley no diferencia entre prestación de servicios en pruebas o con carácter experimental de la prestación en general de servicios de comunicaciones electrónicas, tal y como sí hacía la Ley 11/1998, de 24 de abril. En consecuencia, resulta que la prestación en pruebas de un servicio de comunicaciones electrónicas no se distingue, en la Ley 32/2003, de cualquier otra prestación de servicios que requiere la previa notificación fehaciente, razón por la cual tampoco puede prosperar la alegación de EUROTELE TOR en este particular.

En cuanto a la alegación de que dichos servicios fueron prestados en régimen de autoprestación, cumple significar lo irrazonable de dicha manifestación, a la que por cierto no se refrenda con el más mínimo indicio de prueba. Así, la autoprestación conlleva que los citados servicios de emisión de texto, imagen o sonido, no se prestan a terceros sino para el propio autoconsumo. Es decir según la alegación de EUROTELE TOR S.L. la emisión de 24 programas de televisión, según consta en el Acta de Inspección, sería para el propio consumo de EUROTELE TOR.

La citada alegación, por sus propias consecuencias antieconómicas para la propia mercantil, y por su falta absoluta de lógica comercial, debería al menos ir acompañada de un mínimo indicio probatorio. No obstante se comprueba que, no se aporta la más mínima prueba que desvirtúe el hecho reconocido en el Acta de Inspección, por lo que, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, según el cual: *“ Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados”*.

- Alegación del principio “Non bis in idem”.

Alega la representación legal de EUROTELE TOR, que por idénticos hechos a los constatados en el Acta de Inspección de 28 de enero de 2004, y también contra su representada, la Secretaria de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictó Orden de Incoación del expediente sancionador IS/S 01338/4. Que la citada Orden de incoación es previa al presente expediente sancionador incoado por esta Comisión, lo que hace improcedente su tramitación por aplicación del principio **“non bis in idem”**



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

debiendo en consecuencia proceder a su archivo, o al menos a su suspensión, hasta tanto recaiga resolución firme en el expediente previo incoado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

El citado principio, que se integra a su vez en el más amplio principio de legalidad penal, en abundante doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal constitucional, precisa de una triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos para que se entienda vulnerado.

En otras palabras y de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, por todas (STC 2003/2 de 16 de enero) el *“non bis in idem prohíbe la reiteración sancionadora de los mismos hechos, con el mismo fundamento, padecido por el mismo sujeto”*.

En el presente expediente sancionador, según se acreditará a continuación, **no existe identidad ni de hechos ni de fundamento**, por lo que no cabe de ningún modo alegar el quebrantamiento del citado principio.

En primer lugar y en lo que se refiere a los hechos sancionados en ambos expedientes, puede comprobarse como no existe, en ningún caso, identidad alguna.

Así, en el expediente tramitado por esta Comisión, se sanciona a EUROTELE TOR por el hecho tipificado en el artículo 53.t) de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, consistente en *“ La explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades...”*, es decir por el hecho material consistente en crear una red de comunicaciones electrónicas sin haberlo notificado previamente a esta Comisión según se exige legalmente, (siendo indiferente a estos efectos la naturaleza o tecnología que se use en la red ilegalmente creada: fibra óptica, ADSL, cable, red radioeléctrica..etc) .

En cuanto al expediente sancionador tramitado por la SETSI, de la prueba documental practicada a instancia de la actora (Documento 19), se acredita que el Pliego de Cargos formulado contra EUROTELE TOR, se basa en el hecho material consistente en *“La utilización de frecuencias e instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización (art. 54, apartados a) y b) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones”*).

No es, en consecuencia, la creación de una red de comunicaciones electrónicas lo que constituye, en este caso, el hecho tipificado como infracción susceptible de sanción, sino la utilización, sin la debida autorización, de frecuencias radioeléctricas y la instalación de estaciones radioeléctricas sin la debida autorización.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Se trata pues, de dos sectores de interés público conexos pero plenamente diferenciados, de dos tipos de conducta, de dos hechos materiales distintos, tipificados en diferentes preceptos sancionadores aunque de la misma Ley General, por lo que en ningún caso puede entenderse vulnerado el citado principio de “non bis in idem”.

SEXTO. Sanción aplicable a la infracción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1.b) de la Ley 32/2003, las sanciones que pueden ser impuestas por la mencionada infracción son las siguientes:

“Por la comisión de las demás infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de dos millones de euros.

Las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”.

En aplicación de los anteriores criterios de graduación de las sanciones y de las actuaciones habidas en el presente procedimiento, los límites de la sanción que puede ser impuesta a EUROTELE TOR S.L. por la comisión de la infracción objeto del presente procedimiento son los siguientes:

- En cuanto a la cuantía de la sanción máxima, procede señalar que no resulta posible determinar el beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción por cuanto que la infracción cometida no reporta ningún beneficio para el infractor, al ser la notificación un acto totalmente gratuito para el operador. Por tanto, la sanción máxima que se podría imponer es de dos millones de euros.
- No existe límite, en el presente caso, para el establecimiento de la cuantía de la sanción mínima, habida cuenta de la inexistencia de beneficio para el infractor.

El artículo 131.2 de la LRJPAC dispone que el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

infringidas. En consecuencia, ha de tenerse en cuenta esta previsión legal a la hora de establecer la sanción correspondiente.

La sanción que se proponga imponer a la mercantil EUROTELE TOR, S.L. debe atender necesariamente al principio de proporcionalidad, que preside la actividad sancionadora de la Administración, y a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la LRJPAC y 56.2 de la Ley 32/2003.

En este contexto, *“la Administración debe guardar la debida proporcionalidad entre la sanción impuesta, la infracción cometida y las circunstancias de toda índole que en ella concurren”* (Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998, RJ 1998\2361). Y este principio de proporcionalidad *“se entiende cumplido cuando las facultades de la Administración para determinar la cuantía de la sanción concretada en la multa (...) han sido desarrolladas, en ponderación de los datos obrantes en el expediente, dentro de los límites máximos y mínimos permisibles para la gravedad de la infracción”* (Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1991, RJ 1991\4349).

En atención a ello y en aplicación del principio de proporcionalidad que debe presidir la actividad sancionadora de la Administración y a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la LRJPAC y en el artículo 56.2 de la Ley 32/2003, a la vista de que la actividad infractora no ha reportado a EUROTELE TOR beneficio bruto alguno, teniendo en cuenta la concurrencia de dos circunstancias atenuantes, se considera que procede imponerle una sanción económica de DOCE MIL (12.000) EUROS.

Vistos los antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho y, vistas, asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y demás normas de aplicación, esta Comisión,

RESUELVE

PRIMERO. Declarar responsable directo a EUROTELE TOR, S.L. de la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 53 t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber iniciado, sin presentar ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la notificación fehaciente a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones vigente, las actividades consistentes



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

en la explotación de una red pública y en la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas.

SEGUNDO. Imponer a EUROTELE TOR S.L. una sanción económica por importe de DOCE MIL (12.000) EUROS.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera